



LA CRISIS DEL CORONAVIRUS



Dos operarios trabajan en la preparación de un aula, el pasado viernes, en la Universidad de Córdoba. / PACO PUENTES

Rastreadores y mascarillas obligatorias en todos los campus

El repunte de casos lleva al Ministerio de Universidades, los rectores y las autonomías a endurecer el protocolo sanitario que desde el optimismo acordaron en julio

ELISA SILIÓ, Madrid
Hasta la primera semana de octubre, 1,3 millones de universitarios volverán de forma escalonada a las aulas presenciales que abandonaron hace casi medio año. Y van a retornar en un escenario menos halagüeño del que imaginaron sus rectores en julio, cuando la pandemia parecía amainar. De forma que el secretario de Universidades, José Manuel Pingarrón —en sustitución del ministro Manuel Castells que fue operado el viernes— acordó ayer con los representantes de las 17 comunidades autónomas (consejeros, viceconsejeros o directores generales) endurecer el protocolo marco. Entre las novedades, el uso constante de mascarillas, los responsables covid o la ventilación.

Mascarilla. La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció la semana pasada que a partir de los seis años los escolares llevarían mascarilla y a esta medida se suman ahora las universidades, que iban a permitir quitarse la prenda cuando pudiese garantizarse un distanciamiento de metro y medio. En los exámenes de selectividad de julio, a última hora, varias comunidades temerosas exigieron portar la mascarilla durante cada examen.

Responsable covid. Universidades también coincide con Educación en la necesidad de contar con un responsable covid en cada una de las 83 universidades (50 públicas). Este gestor, a su

vez, tendrá que coordinar a responsables covid en cada facultad. Esta es una obligación, no una recomendación, pues emana del Ministerio de Sanidad y prevalece la autoridad frente a la autonomía universitaria. Al sindicato mayoritario, Comisiones Obreras, la figura no lo convence. Cree que debe depender de los servicios de prevención de cada facultad y que, junto a las centrales, se debe perfilar cómo debe ser el responsable, preferiblemente de la rama sanitaria. “Los rastreos están bien pero van a ser difíciles de materializar. No es fácil que haya un responsable con medios y facultades para ras-

trear y tomar medidas”, se une a la crítica Ramón Caballero, del sindicato CSIF.

Rastreo en el campus. El responsable covid de un centro ayudará a determinar con qué personas de la comunidad universitaria ha tenido contacto estrecho un contagiado. Se entiende por estrecho a cualquier persona que ha pasado más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia del infectado sin mascarilla desde las 48 horas anteriores al inicio de síntomas. Esos contactos se someterán a una prueba PCR y deberán guardar cuarentena con independencia del resultado.

Cuarentena. El reajuste del protocolo prevé que cualquier estudiante con síntomas debe quedarse en casa hasta someterse a una PCR. Si el resultado es positivo, no podrá volver a la Universidad hasta pasados tres días tras el fin de los síntomas, y siempre con autorización de un médico.

Aire fresco. El documento, de 26 páginas, propone que las ventanas de las aulas se mantengan abiertas —en la medida de lo posible— y, si no, que los espacios se ventilen entre 10 y 15 minutos entre clase y clase. En selectividad algunas facultades optaron por abrir las ventanas a la vez que

El reparto del fondo covid, en el aire hasta el 11 de septiembre

En la reunión de ayer entre el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas no se abordó el tema del reparto de los 400 millones del fondo covid destinado a educación superior. Esta etapa formativa incluye Universidad, FP superior y los conservatorios.

Supuestamente en el encuentro de ayer iba a estar presente solo una representación de los consejeros de Universidades —la comisión delegada—, pero por la importancia de estas fechas finalmente las 17 comunidades enviaron a delegados, en

muchos casos el vicepresidente o el director general. Ante esta disparidad de rangos, la discusión sobre la distribución de la partida se aplazó hasta la celebración de la Conferencia General de Política Universitaria, que previsiblemente se celebrará el 11 de septiembre.

Los campus han realizado un esfuerzo económico grande en turnos de limpieza, ordenadores, personal de apoyo, refuerzo de redes de comunicación, simuladores de prácticas, préstamo de materiales... Dicen estar, por este motivo, al borde de la

banquero. Y en ese escenario el presidente de los rectores, José Carlos Gómez Villamandos, asegura, incluso, que cuatro autonomías quieren racanear la partida a las universidades, pues ponen el foco en los colegios.

En julio, los rectores pidieron ayuda al ministro Manuel Castells —que se comprometió a discutir los números con los Gobiernos autonómicos— y le reclamaron que mediase el Ministerio de Hacienda, que según el real decreto del fondo covid puede tomar medidas concretas.

Por el contrario, al término del encuentro de ayer, el ministro elogió la “excelente colaboración manifestada entre las comunidades y las universidades”.

manteniendo el aire acondicionado. Estas ventilaciones forzadas obligarán a reducir la duración de las lecciones, que se acerca a la hora en la mayoría de los centros.

Docencia en reclusión. “El estudiante aislado tendrá derecho a recibir la docencia correspondiente de forma no presencial, siempre atendiendo a la idiosincrasia y especificidades de cada asignatura”, se acuerda en el documento. Esta medida es menos compleja de lo presumible, porque los campus pretenden grabar las clases de forma que el estudiante que no pueda seguirla en directo —en Galicia es frecuente que el sistema se caiga, por ejemplo— pueda conectarse en otro momento del día.

Sin desdobles. El ministerio de Castells no es partidario de que se dividan los grupos en dos para seguir impartiendo las clases distanciados. “Implicaría una sobrecarga inasumible para el profesorado”, subraya el documento. Desde la anterior crisis económica, las plantillas han menguado y envejecido y los sindicatos ya alertaron en julio de que no podrían asumir más clases. La edad media de la plantilla es de 54 años y entre 2012 y enero de 2018 los funcionarios y los interinos docentes disminuyeron un 13,7% (6.731) y aumentaron un 11,3% los laborales (5.664), que imparten menos clases.

Tras la publicación del protocolo, ayer se reunieron los representantes de los colectivos de estudiantes —CREUP y CEUNE— para debatir los detalles del reajuste del documento y su conclusión fue pesimista. “Llega tarde, es escaso. Y solo se centra en las medidas sanitarias, que son importantes, y nada en la docencia, que tiene consecuencias académicas y sociales”, sostiene Andrea Aparicio, presidenta de CREUP.

“No habla de la forma de fortalecer el transporte público y el problema de los alquileres y la vivienda que va a ser muy grave. El tema de la acreditación de las guías docentes”, prosigue Paricio. “No llegamos a entender que no se hable de cómo se van a repartir los alumnos. Parece que van a cortar de forma salomónica y a lo mejor debían de haber debatido con los alumnos”. Caballero, de CSIF, coincide con los alumnos y alerta: “Algunas universidades se han estado agarrando a las medidas de gasto cero”.

Aunque es un protocolo orientativo —salvo algunas medidas a las que obliga Sanidad— los campus, que tienen autonomía universitaria, acatan las medidas porque han sido negociadas por la CRUE —la práctica totalidad de las universidades son miembros de esta conferencia de rectores— con el ministerio y las comunidades. A partir de este documento común, los Gobiernos autonómicos van a actualizar sus propios protocolos, que fueron publicados en los respectivos boletines oficiales, y a su vez sirven de base a los planes de contingencia que cada universidad está obligada a elaborar. Este trajej funcional contrasta con la imagen de inactividad que tiene la opinión pública, provocada por el oscurantismo en la labor del ministerio.



LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Crece las interrogantes sobre la política de comunicación del titular de Universidades: una rueda de prensa en ocho meses

Manuel Castells, ministro desaparecido en combate

E. S., Madrid
Al sociólogo y ministro de Universidades Manuel Castells (Hellín, Albacete, 78 años) no le duelen prendas en reconocer que no le interesa leer lo que se dice de él. Ni sobre sus escasas pero sonadas apariciones ni sobre sus polémicas ausencias. Apenas se le ha visto desde mayo —más allá del Consejo de Ministros— pero al menos ahora se sabe que se recupera de una intervención “no grave pero sí urgente” —según explicó ayer su equipo de prensa—, lo que le impidió este lunes presidir la reunión con una representación de los consejeros autonómicos de universidades. Verle se ha convertido en un reto y casi en una quiniela para los universitarios que ven arrancar el curso sin su ministro.

La pasada semana y durante dos días seguidos los estudiantes consiguieron que Castells fuese *trending topic* con una idea machacona: ¿dónde se ha metido Castells con la que está cayendo? Sin embargo, desde que comenzó la pandemia y hasta mediados de julio, este diario tiene constancia de que todas las semanas el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón —y en muchas ocasiones Castells— se han ido reuniendo con los rectores y los estudiantes, y en menor medida con los sindicatos, con los que el ministro mantiene una relación más tensa.

¿Qué ocurre entonces? Su actividad de comunicación es deliberadamente nula y su poder competencial —como reconoce con sorna— prácticamente ninguno. El ministerio tiene poco más de un centenar de funcionarios y un presupuesto escaso, pues sus becas las gestiona el Ministerio de Educación.

El presidente de los rectores, José Carlos Gómez Villamandos, no pone reparos a Castells: “Desde que empieza la pandemia, CRUE hace propuestas al ministerio, este las acepta y ha ido funcionando bien. Nos hemos sentido cubiertos”. Tampoco se queja Andrea Paricio, nueva presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), quien hoy se verá con Pingarrón. “Nosotros como representantes sabemos lo que



Manuel Castells comparece el pasado mayo ante la Comisión de Universidades del Congreso. / E. NARANJO (EFE)

hace el ministerio, pero los estudiantes no lo perciben. Por eso hay tantos *memes*. Los alumnos al final del curso pasado nos hemos sentido muy poco acompañados por los docentes y los rectores buscan a alguien que les diga qué tienen que hacer. Pero el ministro no tiene esas competencias”.

En cambio, los sindicatos critican su falta de diálogo para discutir el estatuto del PDI (personal docente investigador). A mediados de junio, llegaron a publicar un comunicado conjunto CC OO, UGT y CSIF en el que urgían al ministerio a convocar la mesa de negociación. Decían estar cansados de conocer las noti-

cias por la prensa. Encina González, secretaria general de Universidades e Investigación de Comisiones, relata que para la redacción del protocolo anticovid tampoco se ha contado con ellos. “Es paradójico que una persona que afirma no querer saber de ruedas de prensa y comparecencias, siga publicando como sociólogo. Pero no es nuestra competencia ocuparnos de eso”.

Castells tomó posesión del cargo en enero criticando en público la separación en dos del Ministerio de Ciencia y Universidades. “Hablando muy claro: yo personalmente no estoy de acuerdo”. Los periodistas se frotaron las manos, tenían delante

Al llegar al cargo aclaró que la Universidad sería la protagonista

Pablo Iglesias tuvo que defenderle tras cuatro meses sin decir palabra

a una fábrica de titulares, a la altura del exministro José Ignacio Wert. Pero las altas expectativas pronto se apagaron. Hubo un primer y único desayuno de prensa a mediados de febrero y su equipo explicó entonces —el no apareció— que la intención de Castells era quedarse en la trastienda, para que la Universidad fuese la protagonista. Su deseo era visitar las 50 universidades públicas en maratónicas jornadas de trabajo sin cámaras. La ronda tenía nombre, como el Trini Maratón: *El ministro escucha*. “¿Cuándo empezaría la gira por los campus?”, se interesaron los medios. “En las próximas semanas”, contestó con imprecisión su equipo. Al día siguiente, Castells visitó casi de incógnito la Universidad del País Vasco. Queda huella en Twitter.

Sus comparecencias en el Congreso y el Senado han llenado titulares (“Hay profesores asociados con sueldos de miseria”) y han causado una buena impresión a sus interlocutores. En su última intervención —fue en el Senado para hablar de las tareas de reconstrucción en la Universidad— lejos de contestar a bulto las preguntas, Castells dedicó a cada uno su tiempo con toda la parsimonia del mundo. Tanta, que la sesión, duró ocho horas y ocho minutos.

Castells ha dado una sola rueda de prensa en ocho meses. Fue el 23 de abril y telemática. Horas antes de su convocatoria, el líder de Podemos y vicepresidente Pablo Iglesias, que le eligió para el cargo, había tenido que defenderle: “Comparecerá muy pronto para dar cuenta del enorme trabajo que su ministerio está llevando a cabo”. Y, si nada se tuerce, en dos días protagonizará un acto conjunto con el presidente de los rectores. Segunda oportunidad de preguntarle en todo el mandato.

Desde abril, Castells se ha prodigado algo en los medios, pero más como contertulero de lujo en alguna radio y televisión que como ministro de Universidades. Ha contestado por escrito a cuestionarios de varios periódicos y ha dejado claro que jamás abrirá un perfil en Twitter, aunque tuvo un suplantador que triunfó en las redes.